

0088/2021

El citado Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, regula la materia de protección de datos personales en su artículo segundo, apartado Dos, que da nueva redacción al art. 3 bis de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Cabe mencionar que en la Memoria no existe referencia alguna a la normativa de protección de datos, por lo que no hay exposición sobre la naturaleza o finalidad de las modificaciones propuestas en este aspecto.

I

En el apartado 1 del artículo 3 bis nos encontramos con que el Ministerio de Sanidad es el competente para el reconocimiento del derecho a la protección a la salud y la asistencia sanitaria con fondos públicos de quienes, conforme al art. 3.2, tiene ese derecho. Se añade que *reglamentariamente se determinarán los procedimientos para ejercer el reconocimiento y control del derecho, cuya gestión podrá estar atribuida a otros órganos o entidades de las administraciones públicas.*

Desde el punto de vista de la normativa de protección de datos personales, el Ministerio de Sanidad se constituye, en virtud de esta ley, en el presente caso, como responsable del tratamiento. Es la propia ley la que determina los fines y los medios del tratamiento, y quien establece el responsable del tratamiento (art. 4.7 RGPD).

La mención que hace la ley a la “colaboración” de otras entidades significa que estas entidades deberán, en virtud del deber de colaboración interadministrativa (art. 141 ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), facilitar la información que precise sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. Desde la perspectiva de protección de datos, dicha colaboración se plasmaría en una cesión de dichos datos, esto es, en un tratamiento de datos personales. Dicho tratamiento de datos, la cesión, estará basado en dicha ley, que cabe considerar que es una medida necesaria y proporcionada para salvaguardar objetivos previstos en el art. 23, apartado 1, del RGPD. En concreto, la determinación del derecho a la asistencia sanitaria puede considerarse un objetivo importante de interés público general relacionado con la sanidad pública (apartado e) del art. 23

RGPD), y, asimismo, dada la repercusión del reconocimiento de dicho derecho en los fondos públicos, dicho objetivo de interés público sería también el reconocido en dicha letra e): interés público económico o financiero, de carácter presupuestario.

Continuando con el apartado 1, como hemos transcrito, el procedimiento reglamentario que se prevé para el reconocimiento y control del derecho a la asistencia sanitaria podrá atribuir la gestión a otros órganos o entidades de las administraciones públicas. Esa “gestión” que se atribuye a otros órganos constituiría un verdadero encargo del tratamiento, en el sentido del art. 28 RGPD. Tal y como resulta de los considerandos 81 y 19 del RGPD, esta Agencia ha reconocido en diversos Informes, y hoy día establece expresamente el art. 33 LOPDGDD, el concepto de “acto jurídico” a que hace referencia el art. 28.3 RGPD que puede regir el encargo de tratamiento de datos personales puede recaer en una norma jurídica. Así, el art. 33.5 LOPDGDD ya dice que: *En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargo del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679.* Así, dicha norma reglamentaria, si estableciese la gestión de dichos tratamientos por terceras entidades que actúen como encargadas de los tratamientos cuyo responsable es el Ministerio de Sanidad según esta norma, habrá de incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del RGPD.

Para los tratamientos previstos en los dos últimos párrafos del apartado 1, los responsables serían las entidades ahí previstas: INGESA y Comunidades Autónomas, y el INSS y el ISM.

II

En el apartado 3 del art. 3 bis se ha modificado la redacción anterior para pasar de que los órganos de extranjería podrían comunicar a los responsables de los tratamientos los datos que resulten imprescindibles para realizar la comprobación necesaria del reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a otra en la que dichos responsables de los tratamientos podrán acceder telemáticamente a los datos referentes a la situación administrativa de los extranjeros sin contar con el consentimiento del interesado, así como a los datos que resulten imprescindibles para realizar la comprobación necesaria del reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos.

Respecto del acceso telemático, es este un tratamiento de datos personales más, tal y como resulta del art. 4.2 RGPD, que contiene la

definición de «tratamiento»: *cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales* o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, *consulta*, utilización, comunicación por transmisión, difusión o *cualquier otra forma de habilitación de acceso*, cotejo o *interconexión*, limitación, supresión o destrucción.

El Tribunal Constitucional (TC), en su Sentencia 17/2013, de 31 de enero, tuvo la oportunidad de examinar la posibilidad de acceso por vía telemática por las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a determinados datos de extranjeros para la finalidad ahí prevista (cumplimiento de la normativa de entrada, estancia y residencia de los extranjeros en España). En esta sentencia, el Tribunal Constitucional entendió que el respeto a dicha legislación tiene relevancia constitucional, y limita, en un adecuado ejercicio de ponderación, el derecho fundamental a la protección de datos personales. El texto legal sometido a informe establece la finalidad del tratamiento, y específicamente dicha finalidad es comunicar a las administraciones sanitarias competentes los datos necesarios para verificar en cada momento que se mantienen las condiciones y los requisitos exigidos para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y atención sanitaria con cargo a fondos públicos. Cabe apreciar pues una adecuada restricción, pues, al derecho fundamental a la protección de datos en el cumplimiento de una finalidad constitucional. Pero, añade el TC, dichos tratamientos habrán de regirse en su totalidad por la normativa que regula este derecho. Y cabe recordar ahora, de la misma manera que lo recuerda el TC en dicha sentencia, que dichos tratamientos, aunque no requieran del consentimiento del interesado, habrán de regirse por la normativa de protección de datos personales (FJ 7º). Y entre dichas garantías y principios previstos en el RGPD y la LOPDGDD se encuentra el de información a los interesados cuyos datos son tratados aun sin su consentimiento (art. 14 RGPD) así como que el responsable estará sujeto a los principios del art. 5 RGPD, entre ellos que los datos tratados habrán de ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que son tratados. Por último, mencionar aquí que tanto los extranjeros cuyos datos sean tratados, provenientes de otras Administraciones o entidades, así como los propios no extranjeros cuyos datos son igualmente tratados a los fines previstos en la norma, tienen los derechos previstos en el RGPD, entre ellos el de información, íntegros, (art. 14 RGPD ya citados), sin que se hayan visto limitados, lo cual habría de hacerse, en su caso, mediante una norma legal conforme al art. 23 RGPD.

En cuanto a la nueva redacción, no se advierte en la MAIN la razón del cambio entre la versión anterior y la actual, en cuanto que la actual distingue entre “situación administrativa de los extranjeros” y “los datos imprescindibles para la comprobación de la situación” y la versión anterior tan sólo mencionaba esta última expresión.

En cualquier caso, el precepto concreta que no será necesario el consentimiento de los interesados. Esta expresión, si bien no es incorrecta, cabe entender que es innecesaria hoy día, pues a diferencia del régimen anterior al RGPD (art. 6.1 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, LOPD 99) en el que la base jurídica preponderante para el tratamiento de datos personales era el consentimiento de los interesados, en el actual régimen previsto por el RGPD el consentimiento es tan sólo “una” de las bases jurídicas que permiten el tratamiento lícito de datos personales. Y el consentimiento ha de ser una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por lo que, tal y como resulta del Considerando 42 RGPD el consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno. En consecuencia, y como regla en la mayoría de los casos, el consentimiento no es base jurídica lícita para que la Administración trate datos personales de los interesados.

Se requiere pues buscar una base jurídica diferente, que el precepto legal informado no concreta (tampoco lo hacía el precepto que se modifica). Y esa base legal se considera que podría ser la incluida en la letra e) del art. 6.1 RGPD, es decir, cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. No corresponde a esta Agencia determinar cuál es esa misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, pero puede entenderse que dicha misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos es la determinación de la concurrencia de los requisitos para la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos. Sería más que conveniente que dicha base jurídica se hiciera constar en la propia ley, entre otras razones, siquiera sea porque los interesados habrán de ser informados por el responsable del tratamiento de cuál es la base jurídica que legitima dicho tratamiento (art. 14.1.c) RGPD).

Dicho apartado 3 también contiene una referencia a “los datos que resulten imprescindibles para realizar la comprobación necesaria del reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos”. Dicha expresión “imprescindible”, en cuanto parece contener una limitación a las facultades de los órganos administrativos para solicitar datos personales, en realidad no tiene efecto alguno, porque la propia normativa de protección de datos personales ya establece como principio relativos al tratamiento el de “minimización” (art. 5.1.c) RGPD), según el cual, como ya hemos mencionado, los datos personales a tratar sólo habrán de ser los limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Un tratamiento de datos personales que no sean los imprescindibles para conseguir dicho fin sería contrario al derecho fundamental a la protección de datos personales.

Ahora bien, no se hace constar en la ley cuáles serán esos datos que se van a tratar, sino que se hace una declaración general sobre cualesquiera

datos. Sin embargo, el art. 14.1.d) RGPD establece que los interesados habrán de ser informados, cuando menos, de “las categorías de datos personales de que se traten” por el responsable (además de otra información), todo lo cual, además, deberá constar en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) previsto en el art. 30 RGPD y 31 LOPDGDD. Dicho registro deberá contener toda la información indicada a continuación: a) el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del representante del responsable, y del delegado de protección de datos; b) los fines del tratamiento; c) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales; d) las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales; e) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la documentación de garantías adecuadas; f) cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos; g) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1 RGPD.

En ese mismo apartado 3 se regula que el Ministerio de Sanidad y los órganos o las entidades de las administraciones públicas a las que se refiere el apartado 1, podrán tratar los datos obrantes *en los ficheros de las entidades gestoras, servicios comunes* y órganos de las administraciones públicas competentes que resulten imprescindibles para verificar la concurrencia del reconocimiento y control del citado derecho. La mencionada cesión de estos datos no precisará del consentimiento del interesado.

Esta referencia a entidades gestoras y servicios comunes es enormemente amplia, y esta Agencia quiere recordar y poner de manifiesto que entre dichos datos podrían estar comprendidos datos de salud, y por lo tanto con un régimen de especial protección según el art. 9 RGPD. Nada se prevé en la ley, ni se dice nada tampoco a este respecto, por lo que cabe mencionar en este momento que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han pronunciado sobre los requisitos que han de cumplir en ese caso las normas que establecen dichos tratamientos.

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de examinar los requisitos para que las leyes que establecen tratamientos de datos personales, en cuanto que restricciones al derecho fundamental a la protección de datos personales del interesado, puedan considerarse conformes a la Constitución. Así, dicha doctrina constitucional puede resumirse en la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 76/2019, de 22 de mayo. Esta sentencia contiene la doctrina relevante de este sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales, y aborda tanto las características como el contenido que ha

de tener la normativa que pretenda establecer una injerencia en ese derecho fundamental.

(...) Por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas ora incida directamente sobre su desarrollo (artículo 81.1 CE), ora limite o condicione su ejercicio (artículo 53.1 CE), precisa una habilitación legal (por todas, STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4). (...) Esta doble función de la reserva de ley se traduce en una doble exigencia: por un lado, la necesaria intervención de la ley para habilitar la injerencia; y, por otro lado, esa norma legal «ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica», esto es, «ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención» (STC 49/1999, FJ 4). En otras palabras, «no sólo excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias [...], sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites» (STC 292/2000, FJ 15).

Y ello porque, en el ámbito de las categorías especiales de datos personales, como son los datos de salud, (...)

el Reglamento general de protección de datos establece las garantías mínimas, comunes o generales para el tratamiento de datos personales que no son especiales. En cambio, no establece por sí mismo el régimen jurídico aplicable a los tratamientos de datos personales especiales, ni en el ámbito de los Estados miembros ni para el Derecho de la Unión. Por ende, tampoco fija las garantías que deben observar los diversos tratamientos posibles de datos sensibles, adecuadas a los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que existan en cada caso; tratamientos y categorías especiales de datos que son, o pueden ser, muy diversos entre sí. El reglamento se limita a contemplar la posibilidad de que el legislador de la Unión Europea o el de los Estados miembros, cada uno en su ámbito de competencias, prevean y regulen tales tratamientos, y a indicar las pautas que deben observar en su regulación. Una de esas pautas es que el Derecho del Estado miembro establezca «medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado» [artículo 9.2.g) RGPD] y que «se ofrezcan garantías adecuadas» (considerando 56 RGPD). Es patente que ese establecimiento de medidas adecuadas y específicas solo puede ser expreso. Si la norma interna que regula el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas no prevé esas garantías adecuadas, sino que, todo lo más, se remite implícitamente a las garantías generales contenidas en el Reglamento general de protección de datos, no puede considerarse que haya llevado a cabo la tarea normativa que aquel le exige.

En consecuencia, y tal y como exige el Tribunal Constitucional, la ley que establezca unas determinadas injerencias en el derecho fundamental a la protección de datos personales de los interesados, como podría ser, en el caso presente, la posibilidad de tratar datos personales de los interesados de categorías especiales, como son datos relativos a su salud, requiere que esta en primer lugar, y para cada tratamiento de datos personales de categorías especiales que contemple:

a) especifique el interés público esencial que fundamenta la restricción del derecho fundamental (FJ 7 de la STC 76/2019).

b) en segundo lugar, la ley habrá de regular pormenorizadamente las injerencias al derecho fundamental estableciendo reglas claras sobre el alcance y contenido de los tratamientos de datos que autoriza. Es decir, habrá de establecer cuáles son los presupuestos y las condiciones del tratamiento de datos personales relativos a las categorías especiales de datos personales que habrán de ser objeto de tratamiento, mediante reglas claras y precisas (STC 76/2019, FJ 7 b)

c) Y, por último, la propia ley habrá de contener las garantías adecuadas frente a la recopilación de datos personales que autoriza. El TC ha sido claro en cuanto a que *[l]a previsión de las garantías adecuadas no puede deferirse a un momento posterior a la regulación legal del tratamiento de datos personales de que se trate. Las garantías adecuadas deben estar incorporadas a la propia regulación legal del tratamiento, ya sea directamente o por remisión expresa y perfectamente delimitada a fuentes externas **que posean el rango normativo adecuado**. Solo ese entendimiento es compatible con la doble exigencia que dimana del artículo 53.1 CE (...). Es evidente que si la norma incluyera una remisión para la integración de la ley con las garantías adecuadas establecidas en normas de rango inferior a la ley, sería considerada como una deslegalización que sacrifica la reserva de ley ex artículo 53.1 CE, y, por este solo motivo, debería ser declarada inconstitucional y nula. (...). Se trata, en definitiva, de “garantías adecuadas de tipo técnico, organizativo y procedimental, que prevengan los riesgos de distinta probabilidad y gravedad y mitiguen sus efectos, pues solo así se puede procurar el respeto del contenido esencial del propio derecho fundamental”*. Tampoco sirve por ello que para el establecimiento de dichas garantías adecuadas y específicas la ley se remita al propio RGPD o a la LOPDGDD.

Además, dicha ley deberá respetar en todo caso el principio de proporcionalidad, tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003, de 28 de enero:

“En otras palabras, de conformidad con una reiterada doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan basta

con recordar que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto; SSTC 66/1995, de 8 de mayo [RTC 1995, 66] , F. 5; 55/1996, de 28 de marzo [RTC 1996, 55] , FF. 7, 8 y 9; 270/1996, de 16 de diciembre [RTC 1996, 270] , F. 4.e; 37/1998, de 17 de febrero [RTC 1998, 37] , F. 8; 186/2000, de 10 de julio [RTC 2000, 186] , F. 6)."

La misma doctrina sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así, si el art. 8 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales reconoce el derecho de toda persona a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan, el art. 52.1 reconoce que ese derecho no es ilimitado y permite la limitación del ejercicio de esos derechos y libertades reconocidos por la Carta, limitación que deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de los mismos.

Pues bien, la STJUE de 6 de octubre de 2020, en los casos acumulados C-511/18, C-512/18 y C-520/18, La Quadrature du Net y otros, (no disponible aún a esta fecha en español), en su apartado 175, recuerda que:

En cuanto a la justificación de dicha injerencia, cabe precisar que el requisito, previsto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que la permita debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).

Igualmente, el apartado 65 de la Sentencia (STJUE) de la misma fecha 6 de octubre de 2020 (C-623/17), Privacy International contra Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs y otros (a esta fecha tampoco aún traducida al español), con cita, como la anterior, de la sentencia Schrems 2, dice:

Cabe añadir que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).

En definitiva, el apartado 175 de la STJUE de 16 de julio de 2020, C-311/2020, Schrems 2, dice: *Cabe añadir, sobre este último aspecto, que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir **ella misma** el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate [dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartado 139 y jurisprudencia citada].*

Es pues, la misma ley que establece la injerencia en el derecho fundamental la que ha de determinar las condiciones y garantías, esto es, el alcance y la limitación, que han de observarse en dichos tratamientos,

Y en dicha STJUE de 16 de julio de 2020, Schrems 2, se añade (y se reitera posteriormente en las citadas sentencias de 6 de octubre de 2020):

*176 Finalmente, para cumplir el requisito de proporcionalidad según el cual las excepciones a la protección de los datos personales y las limitaciones de esa protección no deben exceder de lo estrictamente necesario, la normativa controvertida que conlleve la injerencia debe establecer **reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de la medida en cuestión e impongan unas exigencias mínimas**, de modo que las personas cuyos datos se hayan transferido dispongan de **garantías suficientes** que permitan proteger de manera eficaz sus datos de carácter personal contra los riesgos de abuso. En particular, dicha normativa deberá indicar en qué circunstancias y con arreglo a qué requisitos puede adoptarse una medida que contemple el tratamiento de tales datos, garantizando así que la injerencia se limite a lo estrictamente necesario. La necesidad de disponer de tales garantías reviste especial importancia cuando los datos personales se someten a un tratamiento automatizado [véase, en este sentido, el dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartados 140 y 141 y jurisprudencia citada].*

La STJUE de 6 de octubre de 2020, en el caso C-623/17, añade la mención de las categorías especiales de datos:

*68 (...) Those considerations apply especially where the protection of the **particular category of personal data that is sensitive** data is at stake (see, to that effect, judgments of 8 April 2014, Digital Rights Ireland and Others, C-293/12 and C-594/12, EU:C:2014:238, paragraphs 54 and 55, and of 21 December 2016, Tele2, C-203/15 and C-698/15, EU:C:2016:970, paragraph 117; Opinion 1/15 (EU-Canada PNR Agreement) of 26 July 2017, EU:C:2017:592, paragraph 141).*

Resulta pues tanto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como del Tribunal de la UE que es la propia ley que establece el tratamiento de datos

de categorías especiales (esto es, la injerencia en el derecho fundamental) la que ha de establecer, ella misma, (i) la finalidad de interés público esencial que lo justifica, (ii) reglas claras y precisas sobre el alcance y contenido de los tratamientos de datos que autoriza, y (iii) la ley ha de establecer unas exigencias mínimas de modo que las personas cuyos datos se hayan transferido dispongan de garantías suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos de carácter personal contra los riesgos de abuso.

A la vista de la amplitud y ambigüedad de la regulación legal, esta Agencia sugiere que la regulación de las cuestiones relativas a los tratamientos de datos personales que resulten de esta norma se aborden de una manera integral en la propia ley, con una redacción en la que participe directamente el Delegado de Protección de Datos del órgano redactor del anteproyecto, de manera que en la propia ley se regulen todas las circunstancias que determinan a licitud de los tratamientos de datos que resultan del propio texto legal. Como ejemplo concreto, ya el legislador español se ha hecho eco de esta necesidad, y en los sucesivos textos legales se van incorporando la regulación completa de los tratamientos. Obsérvese que ello está previsto específicamente en el art. 6.3 RGPD, el cual, en el caso de tratamientos de datos personales cuyas bases jurídicas sean el cumplimiento de una obligación legal o de una misión de interés público, la propia base jurídica (en el caso español, la ley -art. 8 LOPDGDD-), dicha ley podrá contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento, entre otras: las condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte del responsable; los tipos de datos objeto de tratamiento; los interesados afectados; las entidades a las que se pueden comunicar datos personales y los fines de tal comunicación; la limitación de la finalidad; los plazos de conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del tratamiento.

A tal efecto, cabe mencionar como ejemplo que podría ser tenido en cuenta, la regulación contenida en la Disposición adicional cuarta de la ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte.